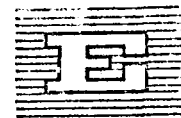


NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1208
10 de marzo de 1976

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
32º período de sesiones
Tema 13 del programa

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES, INCLUSO LA POLITICA DE DISCRIMINACION RACIAL Y DE
SEGREGACION Y LA POLITICA DE APARTHEID, EN TODOS LOS PAISES Y EN
PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Carta de fecha 27 de febrero de 1976, dirigida al Director de la División
de Derechos Humanos por el Representante Permanente de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Con referencia a la acusación formulada por el Representante Permanente de Portugal en la carta que dirigió al Director de la División de Derechos Humanos acerca de la cuestión de los 23 soldados portugueses detenidos en Timor oriental (documento E/CN.4/1203), tengo el honor de exponer a continuación la posición del Gobierno de Indonesia sobre la cuestión a la consideración de todas las partes interesadas:

1. El problema de los 23 soldados portugueses detenidos en Timor oriental ha surgido como consecuencia del conflicto armado y de los disturbios que tuvieron lugar en Timor oriental a partir del mes de agosto del año pasado. En realidad, ese problema forma parte del problema mucho más amplio y más trágico de fratricidio y destrucción, de miles de refugiados que buscaban asilo al otro lado de la frontera y del sinnúmero de personas mantenidas cautivas por las diversas partes en el conflicto, todo ello a consecuencia de una situación de la que Portugal, como Potencia administradora del territorio en aquella época, no puede eludir la plena y exclusiva responsabilidad.
2. Por consiguiente, como se ha declarado en varias ocasiones, puede verse claramente que el Gobierno de Indonesia no puede ser considerado responsable en modo alguno en la cuestión mencionada, dado que no tuvo parte alguna en los orígenes del problema ni tiene competencia directa en la solución de las consecuencias del mismo. Desde un principio, dicho problema ha sido, y sigue siendo, un problema entre el Gobierno de Portugal y las partes directamente interesadas en el conflicto de Timor oriental. Por ello, y en vista del establecimiento del actual gobierno provisional de Timor oriental, se trata de un problema que el Gobierno de Portugal debe procurar resolver directamente con las autoridades de facto de Dili.

3. No obstante, movido por consideraciones humanitarias y de conformidad con el espíritu del Acuerdo de Roma, concluido entre los Ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia y Portugal el 2 de noviembre de 1975, el Gobierno de Indonesia se ha comprometido a hacer cuanto esté a su alcance para conseguir que el partido UDT ponga en libertad a los detenidos.

Después de la formación del Gobierno provisional de Timor oriental el 17 de diciembre de 1975, el Gobierno de Indonesia ha establecido, y siguen manteniendo, contactos constantes con las autoridades competentes de Dili para tratar de llegar a una pronta solución del problema. Entretanto, ha sido informado por el Gobierno provisional de Timor oriental de que los detenidos serán autorizados a enviar mensajes personales a sus familiares en Portugal.

En consecuencia, el Gobierno de Indonesia rechaza categóricamente toda alegación o insinuación que ponga en duda la sinceridad de sus esfuerzos para coadyuvar a la solución del problema.

4. Puede resultar aleccionador observar que mientras el Gobierno de Indonesia, por un lado, sigue aportando su cooperación sincera para tratar de resolver el problema de los 23 soldados portugueses detenidos, el Gobierno de Portugal, por otro lado, se ha negado constantemente a considerar toda petición del UDT o de cualquier otro partido de Timor oriental de que ayude a resolver el problema de sus miembros detenidos por sus adversarios, es decir, el Fretilin, con el que el Gobierno de Portugal sigue manteniendo estrechos contactos en todo momento.

En vista de ello, cuesta trabajo comprender la actitud incoherente del Gobierno de Portugal, que trata de censurar al Gobierno de Indonesia por los esfuerzos que realiza, mientras él mismo se muestra claramente reacio a cooperar e incluso a comunicarse directamente con las partes más interesadas a fin de llegar a una solución apropiada del problema de los detenidos.

5. Además, el Gobierno de Indonesia desea señalar a la atención de la Comisión de Derechos Humanos que, en el contexto humanitario, es Indonesia quien ha dado asilo a decenas de miles de refugiados de Timor oriental, proporcionándoles alimentos, ropa, alojamiento y asistencia médica, desde que estalló el conflicto armado en Timor oriental.

De esos refugiados unos 10.000 siguen en Timor indonesio, mientras los otros, con la asistencia de Indonesia, han regresado a sus aldeas.

Es notable que Portugal siga pretendiendo que se le reconozca como Potencia administradora de Timor oriental y que al propio tiempo no haya manifestado el menor interés por el bienestar de esos refugiados, actitud que contrasta claramente con su preocupación por la suerte de los 23 soldados portugueses detenidos.

6. También es interesante observar que actualmente, en un contexto más amplio, el Secretario General de las Naciones Unidas y en particular el Sr. V. Winspeare Guicciardi, en su calidad de Representante Especial del Secretario General, están realizando esfuerzos para lograr una solución de la cuestión de Timor oriental. En vista de ello, no se puede por menos de dudar seriamente de los motivos de Portugal al plantear la cuestión de los 23 detenidos -que en realidad no es más que un aspecto secundario del problema global de Timor oriental- pues tal acción sólo puede complicar y entorpecer los citados esfuerzos del Secretario General con miras a llegar a una solución integral del problema de Timor oriental.

Le ruego se sirva disponer que el texto de esta carta se distribuya como documento oficial del 32º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

(Firmado) Ali ALATAS